

X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional del Rosario. Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional del Litoral, Rosario, 2005.

Tucumán, año 1975. La guerrilla y el terrorismo de estado antes del golpe militar.

Pucci, Roberto.

Cita:

Pucci, Roberto (2005). *Tucumán, año 1975. La guerrilla y el terrorismo de estado antes del golpe militar. X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional del Rosario. Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional del Litoral, Rosario.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-006/625>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

X JORNADAS INTERESCUELAS/DEPARTAMENTOS DE HISTORIA
Rosario, 19-22 de septiembre de 2005

Tucumán, 1975. La guerrilla y el terrorismo de estado antes del golpe militar

Roberto Pucci

Universidad de Tucumán

Profesor Asociado

Balcarce 424 3º B – 4000 San Miguel de Tucumán

robertopucci@yahoo.com

El número de personas secuestradas y desaparecidas en Tucumán durante los años '70, según los casos informados por la CONADEP, la Comisión Bicameral de la provincia y las posteriores denuncias ante la justicia recogidas por las organizaciones defensoras de los derechos humanos asciende a unas 650 víctimas, cifra que, muy probablemente, constituye un subregistro. De ese total *registrado* de secuestros, cerca de un 40 por ciento fueron cometidos antes del 24 de marzo de 1976: un dato frío y brutal que indica que el terrorismo de Estado imperó en Tucumán antes del golpe militar.¹ Sin embargo, no es difícil percibir que la memoria así llamada “colectiva” y el discurso histórico predominante tienden a descuidar esta evidencia, situando el 24 de marzo como el origen del horror. Esta ponencia indaga las condiciones de posibilidad de semejante deriva de un gobierno constitucional más allá de las fronteras de toda ley y decencia, que convirtieron a Tucumán, a partir de la experiencia foquista del ERP y del lanzamiento del “Operativo Independencia”, en un escenario precursor de aquella regresión de la política argentina hacia el estado de salvajismo.

Una guerra que nunca fue

El mito de la guerra contra el terrorismo urbano y rural en la Argentina, como señalan Andersen, Vezzetti y otros, fue empleado por el bloque productadura para justificar primero esa criminalidad y luego el golpe militar, creando una imaginaria amenaza de toma del poder. En el caso particular de Tucumán, se describe una guerrilla que había llegado a ocupar un tercio de su territorio -aquella porción de Tucumán que se definió como “zona de operaciones” del Ejército- y que estaba a punto de crear “un estado independiente”.² El ERP, en realidad, nunca “controló” ni el territorio que pisaba: sus campamentos eran escondites en el monte, una selva deshabitada que les daba refugio pero que rápidamente se convirtió en su propia encerrona.

¹ Más adelante daremos algunas precisiones acerca de las cifras. Las denuncias no realizadas debido al temor, a la falta de medios o al desconocimiento por parte de los interesados, o por desacuerdo con los militantes desaparecidos, generaron un subregistro de las desapariciones y secuestros: por cada denuncia se estima que dos no se hicieron. V. Cámara de Diputados de la Nación. *Diario de Sesiones*, 24 de marzo de 1998.

² Martín Andersen. *Dossier secreto. El mito de la guerra sucia*. Buenos Aires, Planeta, 1993; Hugo Vezzetti. *Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2002, pg. 69. Como ejemplo de los sostenedores del mito véase: Gobierno de Tucumán. *Tucumán-Argentina. Cuna de la Independencia. Sepulcro de la Subversión, 1975-1977*. Tucumán, 1977; Rosendo Fraga. “La guerra en Tucumán. Memoria: sangre sobre el monte”, en *La Nación*, 13 de febrero de 2005.

Las “ocupaciones” de pequeñas villas no pasaron nunca de ser más que operaciones relámpago, acciones efectistas de propaganda sin posibilidad alguna de establecer un control prolongado. Su máxima acción fue el copamiento de Acherai, realizado en 1974 antes de que el Ejército ocupase Tucumán, que duró unas pocas horas y en el que sólo tuvieron que reducir a una comisaría con media docena de policías. Si la tentativa del ERP en Tucumán fue la “mayor experiencia de guerrilla rural” de la historia argentina, según caracterización de María Seoane, no por eso dejó de ser un gran fiasco, un simulacro, que no pasó de la categoría de aventura improvisada y condenada al fracaso desde el origen.³

Desde un punto de vista técnico, el combate entre el ejército y la guerrilla rural del ERP no fue una guerra, como tampoco lo fue el conflicto planteado con el terrorismo urbano de los diversos grupos armados. La “Compañía de Monte” tucumana nunca sumó más de 50/100 guerrilleros, enfrentada por una fuerza que osciló entre 2500 y 6000 efectivos militares: de un lado del combate había un ejército, del otro un puñado de personas armadas. En el orden nacional, el ERP llegó a contar con unos 600 integrantes; el foco guerrillero no logró ninguna inserción entre los pobladores rurales de la zona, peladores y/o pequeños productores cañeros, como no sean algunas incorporaciones de obreros y ex obreros pertenecientes desde años atrás al PRT, y quedaría hasta el fin empantanado en el cerro.⁴

En octubre de 1975 comenzó el fin de la compañía de monte, cuando cayó casi todo el estado mayor del foco guerrillero: Asdrúbal Santucho, Manuel Negrín y Jorge Molina. Sólo se salvó Lionel Mac Donald, quien continuaría al frente de un residuo de insurgentes que no superaba la docena, los que en pocos meses fueron completamente aniquilados. En febrero de 1976, Firmenich y Perdía organizaron la “Fuerza de Monte del Ejército Montonero”, con la idea de desarrollar un segundo foco rural en la zona del dique El Cadillal, al norte de la ciudad de Tucumán. La aventura fue abortada por el Ejército apenas al comenzar en una cacería que se extendió por Vipos, Choromoro y Trancas.⁵

La manipulación informativa y la censura absoluta impuesta sobre la prensa local y nacional por parte del Ejército posibilitaron la fabricación del mito de la guerra en el monte, la invención de una gesta heroica de “batallas” y de

³ María Seoane. *Todo o Nada. La historia secreta y pública de Mario Roberto Santucho, el jefe guerrillero de los años setenta*. Buenos Aires, Sudamericana, 2003 (1991). Marcos Taire, en “Bussi o la historia de la infamia”, en www.argenpress.info, 2004, apunta las características de la toma de Acherai por el ERP.

⁴ El análisis sobre el aspecto “militar” del conflicto en: Prudencio García. *El dilema de la autonomía militar. Argentina bajo las Juntas Militares*. Madrid, Alianza, 1995, y en Vezzetti, ob. cit. El número de contendientes en Adel Vilas. “Tucumán: el hecho histórico”, folleto de 9 pgs, s/f; y en Luis Mattini. *Hombres y mujeres del PRT-ERP*. Buenos Aires, Contrapunto, 1990; Videla y Menéndez informaban ante 60 corresponsales argentinos y extranjeros que la zona de operaciones abarcaba 6000 km², donde actuaban en ese momento 2500 efectivos: *La Gaceta*, 31 de octubre de 1975. Según la página web “aeromilitia”, de la Fuerza Aérea, en lo más álgido del Operativo las fuerzas militares y de seguridad comprendieron el despliegue de unos 6.000 hombres, con participación de un equipo de combate de la Fuerza Aérea integrado por 4 helicópteros y dos aviones.

⁵ *La Gaceta* del 25 de febrero de 1976 contiene el primero de los partes de Bussi sobre estos hechos, donde comunica que mataron a 10 guerrilleros en “cinco enfrentamientos” en la zona de El Cadillal; en el curso de las siguientes semanas se registra el exterminio del grupo.

un “ejército enemigo” de centenares de combatientes directos, con varios miles de colaboradores o como tropa de reserva.⁶ *La Opinión* del 8 de enero de 1976, en un balance de 11 meses de operativo, afirmaría que se habían producido “alrededor de 500 enfrentamientos”, si bien agregaba que la mayoría fueron escaramuzas sin bajas de ambos lados. Sin embargo, en la información proporcionada por las autoridades militares en el momento de los hechos, pese a su carácter retaceado y deliberadamente confuso, se revela el carácter fraudulento del mito. El relevamiento día por día de los “hechos bélicos” informados en la prensa local, entre el 9 de febrero de 1975 y octubre de 1976 (cuando Bussi proporcionó el último parte de “enfrentamientos” en la zona del monte, dando cuenta de la muerte de Lionel Mac Donald y tres guerrilleros más), arroja un registro de un poco más de treinta presuntos enfrentamientos de variada índole, contando las descripciones más vagas y dudosas contenidas en esos partes militares. De su contenido surge con nitidez, pese a la intención contraria, que todo se redujo a una saga de operaciones policiales.

Pasado el tiempo, diversas fuentes militares y la prensa adicta coincidieron en presentar como las “batallas” más importantes y decisivas a las de Manchalá y San Gabriel. A pesar de la maraña de versiones contradictorias, medias verdades y fábulas prefabricadas, es posible afirmar que ninguna de las dos fue una batalla. En Manchalá, el 28 de mayo de 1975, el mayor contingente reunido por la Compañía de Monte del ERP en toda su experiencia (entre 40 y 75 combatientes según las fuentes), se encontró por sorpresa con una pequeña patrulla de soldados, con la que se tirotearon durante un tiempo no precisado, cuyo saldo fue un soldado herido y entre uno y tres guerrilleros muertos. Luego el grupo de insurgentes se desbandó y se refugió en el monte.⁷

El enfrentamiento de San Gabriel, en octubre de 1975, parece haber sido el episodio final de una larga cacería del grupo guerrillero que se extendió desde comienzos del mes hasta que, con helicópteros artillados, el Ejército mató a una docena de insurgentes que se ocultaban en un cañaveral, donde

⁶ La Agencia Noticias Argentinas denunciaba el 12 de febrero de 1975 que dos corresponsales enviados para cubrir el Operativo fueron detenidos, golpeados e interrogados durante más de 12 horas, de pie y con los ojos vendados, a quienes despacharon de retorno a la Capital Federal: una advertencia de que en esa “guerra” no habría nunca corresponsales en el frente, tan sólo agentes de propaganda y desinformación rigurosamente controlada. El Ejército organizó tres visitas “programadas” de periodistas nacionales y extranjeros en febrero, junio y octubre de 1975.

⁷ El parte de Vilas en *La Gaceta* del 29 de mayo de 1975 da cuenta de un choque entre un contingente de “más de 40 guerrilleros” y una patrulla militar de 15 hombres, luego del cual el ERP abandonó 3 camionetas y dos camiones pesados, armamento, municiones y equipos. El saldo fue de 1 guerrillero muerto, aunque “quizás tengan más bajas”, y un oficial herido. En un parte del 6 de agosto, Vilas recordará que en Manchalá hubo una sola baja, del ERP. Para *La Opinión* del 8 de enero de 1976, el choque fue entre 60 miembros del ERP y 15 soldados, con un extranjero muerto y sin bajas en el Ejército. *Somos* del 1 de octubre de 1976 sostiene que fueron 75 uniformados y 75 de civil, de apoyo del ERP. La revista *Siete Días* del 28 de febrero de 1977 publicó una entrevista a la maestra de la escuela de Manchalá, quien afirmó que participaron más de 100 guerrilleros, los que enfrentaron a un centinela y 4 soldados que se encontraban pintando la escuela; tras el tiroteo y rápido desbande, habrían muerto varios “cabecillas” guerrilleros, dejando armas y documentación. *La Razón* del 27 de mayo de 1977 afirmaba que la patrulla militar se componía de 7 hombres y los guerrilleros eran 50, de los cuales cayeron varios, incluido un extranjero, y el centinela fue herido.

murió también uno de los artilleros. Lo que parece seguro es que la Compañía de Monte fue diezmada en esos días.⁸

Algunos comunicados de Vilas transparentaban la verdadera naturaleza de aquella “guerra”. El 25 de junio informaba de la muerte de 7 guerrilleros en una serie de “procedimientos” realizados en Las Mesadas, Los Sosa y en la zona del INTA Famaillá, entre los días 22 y 23 de junio, en los que no se habían registrado bajas “en la propia tropa”: obsérvese que prescindía, con indiferencia, del eufemismo “enfrentamiento” que hasta entonces parecía aconsejable. El 29 de julio retomaría este término para informar que había ocurrido uno en Las Mesadas, pero cuyo resultado fue la muerte de un menor y una mujer del lugar gravemente herida, en el interior de su propia vivienda. El 6 de agosto, en un “combate” en lugar nunca precisado, según el jefe del Operativo se habría producido la “mayor derrota” del ERP hasta el momento, con 8 guerrilleros muertos: un “combate” cuyo campo de batalla carecía de nombre, y que pronto desapareció de la saga construida más tarde por el propio general Vilas. Es muy probable que la desmesura impune con la que hablaba (no con la que actuaba, seguramente) motivara que el Comando del Ejército en Buenos Aires le quitase el control de la información, porque desde entonces los partes provienen de allí o del III Cuerpo en Córdoba, aumentando su nivel de silencio y opacidad.⁹

El número de bajas de uno y otro bando corrobora el carácter de meras operaciones policiales de aquellos enfrentamientos: en octubre de 1975, el comando general del Ejército informaba que desde el 9 de febrero la fuerza había sufrido 15 bajas y los guerrilleros 104. El general L.B. Menéndez comunicó a la prensa en Córdoba en diciembre de 1975 que desde el comienzo del Operativo se habían producido 35 bajas en el ejército y 149 del enemigo. En abril de 1977, el general Luciano Jáuregui reiteró la cifra de 35 bajas del ejército en Tucumán, de los cuales 14 eran oficiales y 21 de tropa, incluidos 7 gendarmes. Si nos remitimos a los partes militares de 1975, el saldo es de 17 oficiales, soldados y policías muertos, de los cuales 9 se debieron a diversos accidentes, pero de los encuentros de octubre, donde los trascendidos hablaban de “varias bajas militares”, sólo se precisa la muerte del artillero.¹⁰

⁸ La información sobre los hechos de octubre de 1975 fue de carácter “extraoficial”. *La Gaceta* del 8 de octubre publica versiones acerca de 20 guerrilleros muertos en Sauce Huascho y en otros combates, con 50 detenidos y bajas militares sin precisar. En los días siguientes, las versiones indicaban que el enfrentamiento se había producido cuando una veintena de guerrilleros emboscaron a una patrulla y mataron cinco militares, pero perdieron a varios integrantes y uno de sus jefes, Molina. El 27 de octubre, *La Gaceta* informa del traslado de los restos de Asdrúbal Santucho a Santiago, a quien da por muerto “hace días”, junto con un boliviano y un chileno. Agrega que sumaban ya 42 los guerrilleros muertos a lo largo del mes, y que habría caído Manuel Negrín. *La Opinión* del 8 de enero de 1976 sitúa el encuentro en San Gabriel, ocurrido “entre el 7 y el 10 de octubre”, en las proximidades de Acheral, con un saldo de “entre 20 y 40 muertos”, y lo califica de “golpe decisivo”, con 2 jefes guerrilleros muertos y bajas en el Ejército. Vilas sostendrá después que “todo terminó en el combate de San Gabriel, el 25 de octubre”.

⁹ *La Gaceta*, 25 de junio, 29 de julio y 6 de agosto de 1975.

¹⁰ Informe del Comando General en *La Opinión*, 26 de octubre de 1975; Menéndez en *La Opinión*, 16 de diciembre de 1975; Jáuregui en *Clarín*, 20 de abril de 1977; partes militares en *La Gaceta*, febrero-diciembre de 1975.

Vilas sostendría que la lucha contra la guerrilla rural terminó el 25 de octubre de 1975, con el combate de San Gabriel, y que en adelante todo se resolvió como una “caza del subversivo que huye o del subversivo que está escondido o perdido. Allí se terminó su capacidad de lucha”. Se ufanaba asimismo de que el 21 de diciembre entregó a Bussi el mando de “un territorio recuperado”. Para los voceros de la Fuerza Aérea, “los objetivos del Operativo Independencia estaban cumplidos a fines de 1975, ya que la subversión había sido efectivamente neutralizada en el teatro de operaciones”, y lo que siguió fue una “fase de consolidación” con operaciones de corte policial en todo el territorio tucumano, a las que nombran como “Cerrojo”, “Fanfarria”, “Inmaculada”, etc. Santucho había inmolado lo que quedaba de su grupo armado en todo el país, unos 150 efectivos, en el asalto a Monte Chingolo de fines de 1975, sufriendo entre 50 y 70 bajas, un descalabro que representó el comienzo del fin para el ERP, finalmente consumado con su muerte. Videla dirá el 25 de enero de 1976 que “Tucumán está totalmente controlado”, pero que “la subversión no es solamente una manifestación militar, sino que es un problema global”: era la otra “guerra” que pensaban continuar, cuyo teatro de operaciones se situaba en otra parte: las ciudades, las fábricas, las universidades, las casas.¹¹

La otra guerra

El enemigo a combatir, tipificado como “subversivo”, adquirió la dimensión de un demonio ubicuo y universal en la mentalidad del bloque militar e integrista del cual el general Adel Vilas era un representante característico. La “subversión cultural”, según Vilas, era más importante y peligrosa que la subversión armada, porque la nutre, y no se reducía al marxismo o al “progresismo cristiano”, puesto que se había iniciado cinco siglos atrás, con Guillermo de Occam, la reforma, el racionalismo y el empirismo, “verdadera filosofía diabólica” del siglo XVIII, coronada por la revolución de 1789, el bolchevismo y, en nuestro país, por la Reforma de 1918. Para Vilas, la “derrota definitiva” de la subversión se lograría “cuando se efectúe un control de la inteligencia y de la cultura”: “para graficar: se ha podado un árbol y para que no brote en el futuro será necesario quemar la raíz y el tronco de ese árbol”. Por cada delincuente subversivo, agregaba, hay 7 u 8 ideólogos que lo alimentan y lo cuidan.¹²

La inflación absoluta de la figura del “subversivo” permitía presentar al terrorismo como una vasta conspiración de la cual los terroristas urbanos o rurales eran apenas una pequeña parte, tipificando como subversión todo cuestionamiento político y social, toda acción de protesta o de lucha política o sindical en las fábricas, las universidades y las escuelas, justificando la extirpación de cualquier disidencia. La metodología criminal de Vilas y del

¹¹ Adel Vilas: declaraciones en *Somos*, 16 de noviembre de 1977; *Aeromilitia*; Videla en *La Gaceta*, 25 de enero de 1976.

¹² Adel Vilas. “Reflexiones sobre la subversión cultural” en *La Voz del Interior* (Córdoba), 21 de agosto de 1977, y *Somos*, 16 de noviembre de 1977. En un escrito titulado “Bahía Blanca: el hecho histórico”, con su firma, sin fecha, (ca.1977, que luego integrará su “libro prohibido”), Vilas dirá que los enemigos son el liberalismo y el marxismo, fuente de toda subversión, que anida en las universidades y los centros culturales, la Fundación Bariloche, la UTN, los sindicatos, las escuelas, las organizaciones profesionales, la Iglesia.

Ejército no se justificaba por el poderío de la guerrilla, sino por lo que los militares y los represores tenían en la cabeza: la idea de que la subversión no se reducía a los terroristas que habían tomado las armas y recurrían al atentado y al crimen, sino que se trataba de algo mucho más amplio: anidaba en los claustros, los sindicatos, los partidos, la justicia, los abogados, en fin “en todo el rico, movedizo y cambiante mundo de ideas de la democracia”.¹³

Esa filosofía incorporó otro componente un tanto paradójico. Cuando el general Carlos Delía Larroca, entonces comandante del III Cuerpo, anunció el 11 de febrero de 1975, desde Córdoba, que el Ejército había tomado el comando de las acciones contra la guerrilla en el monte tucumano, afirmó que se iniciaba el “Operativo Tucumán”: ¿se trataba entonces de una segunda edición de la invasión de 1966? Mariano Grondona, en agosto de 1975, todavía aludía al “Operativo Tucumán”. Recién en septiembre de 1975 Videla mencionará, por primera vez según mis registros, el “Operativo Independencia”, cuando revistaba tropas en Tucumán en compañía de Menéndez.¹⁴ Necesitaban el nuevo nombre porque ya formaba parte de la doctrina del ejército la noción de que la “subversión” se había originado en las “condiciones socioeconómicas” de Tucumán provocadas por el cierre de los ingenios en 1966, una tesis que sostendrían los generales Bussi y Jáuregui, entre otros, por lo que no convenía que se identificase esta segunda invasión militar de la provincia como una reedición de la de Onganía.¹⁵ Esta sorprendente e incoherente atribución del fenómeno guerrillero a la pobreza tucumana, donde de pronto el “elemento subversivo” no aparecía ya como un mero “invasor apátrida”, un agente del demonio liberal y marxista, era errónea, porque la mayor parte de los terroristas y guerrilleros provenían de las clases altas y medias de la sociedad argentina, pero tenía un propósito fundamental. Si la “subversión” era hija de la pobreza, entonces Tucumán no podía ser menos que un hervidero de “subversivos”, lo que permitía identificar como guerrilleros, colaboradores o agentes de esa subversión, indiscriminadamente, a toda la población de la provincia. De esa manera, la persecución sistemática y los crímenes masivos de ciudadanos indefensos pudo ser presentada como esa guerra que nunca fue contra un fantasmal ejército de “BDSM”: “bandas de delincuentes subversivos marxistas”.¹⁶

La metodología del terrorismo de estado

La guerra contra ese subversivo universal, el ciudadano disidente o aún “indiferente”, se vuelve entonces una guerra de aniquilación. Vilas dirá que

¹³ V. Vezzetti y Pablo Giusani, en *La Razón* del 4 de febrero de 1986, a quien pertenece la última cita.

¹⁴ Delía Larroca, en *La Gaceta*, 13 de febrero de 1975; Mariano Grondona en *Carta Política* n° 29, 15 de agosto de 1975; Videla, en *La Gaceta*, 14 de setiembre de 1975.

¹⁵ Bussi en *La Razón*, 16 de octubre de 1976 y en *Clarín*, 17 de octubre de 1976; Jáuregui, “Disertación sobre la Operación Independencia” en *Clarín*, 20 de abril de 1977.

¹⁶ La revista *Somos* del 1 de octubre de 1976 afirmaba que “cerca del 50% de la población” de Tucumán colaboraba con la guerrilla al llegar Vilas, y que la UNT era uno de sus focos principales, junto con las organizaciones políticas, gremiales, empresarias y sectores del clero. Ver descripción de los jóvenes “urbanos” que van a predicar la revolución en las villas rurales de Tucumán, como Santa Lucía, en los testimonios de Lucía Mercado: *El Gallo Negro. Vida, pasión y muerte de un ingenio azucarero*. Buenos Aires, Ed. de la autora, 1997; y *Santa Lucía de Tucumán. La Base*. Buenos Aires, Ed. de la autora, 2005.

luchar en “forma convencional” no era aconsejable, y que “la importante diferencia radicó en que hasta el 9 de febrero de 1975, los delincuentes subversivos eran capturados y llevados a la Justicia federal o quedaban a disposición del PEN, para luego ser liberados o amnistiados. A partir de esa fecha, se buscó la forma de obligarlos a combatir...”. Luciano Jáuregui sostendrá que la Operación Independencia “tuvo” que desarrollar “estrategias de aniquilamiento” debido a la “movilidad” de las bds, que habían “infiltrado” el estado, los gremios, la Iglesia, los partidos políticos, el Ejército, las universidades, etc.¹⁷

La represión se efectuó por medio de “grupos de tareas” integrados por civiles, militares y personal de inteligencia, que el general Menéndez formó ya en 1974, a las órdenes de los comisarios Albornoz e Hidalgo. Vilas informaba de la constitución de estas “Fuerzas de tareas” en San Miguel de Tucumán: 200 soldados, 60 Federales, 30 miembros del “grupo especial” de la Policía de Tucumán, y otra fuerza “especial” en Concepción, con 30 miembros, cuya misión era “la caza del subversivo urbano”, agregando que se trataba de “equipos especiales, tipo comando”, cuyo “trabajo no tiene brillantez, como tampoco reciben condecoraciones por su hazañas, pero siempre están cerca de la muerte”. Sus “operaciones” se efectuaban de madrugada, creando “zonas liberadas”, lo que significaba manzanas o barrios enteros completamente cercados por los efectivos, con el alumbrado público cortado y los efectivos encapuchados. Vilas sostendría que “la noche, en esta guerra, es más importante que el día. El Ejército no debe dormir, los mejores éxitos los conseguimos entre las 2 y las 5 de la madrugada, la hora en que el subversivo duerme”.¹⁸

El lanzamiento del Operativo Independencia se acompañó con la creación de los primeros centros clandestinos de detención (CCD) que conoció la Argentina. Los militares les llamaban “lugares de reunión de detenidos”: como lo puso de manifiesto Vilas en su declaración indagatoria ante la Cámara federal de Bahía Blanca en 1987, los CCD eran clandestinos para la ciudadanía pero no “ilegales” para los militares, porque operaban según reglamentos, poseían su código de identificación, los superiores sabían de su existencia y el aprovisionamiento de los mismos se efectuaba por medio de los “proveedores habituales” del Ejército. El informe de la Bicameral registra la existencia de 17 CCD en Tucumán entre 1974 y 1978; la Jefatura de Policía ya funcionaba como CDD desde 1974; Vilas agregó en 1975 los siguientes: Escuela Diego de Rojas, administración del Ex ingenio Lules, Arsenales, los conventillos de La Fronterita, Escuela de Educación Física, Escuela de Policía de Tucumán, Ex Ingenio Santa Lucía, Comisaría de Monteros.¹⁹

¹⁷Adel Vilas. “Tucumán, enero a diciembre de 1975”, en www.nuncamas.org/investig/vilas/acdel Digitalización del libro cuya publicación prohibió Videla; Jáuregui en *Clarín*, 20 de abril de 1977.

¹⁸ Vilas en *El Atlántico* de Mar del Plata, 2 de enero de 1978, y en revista *Somos* del 1 de octubre de 1976, donde se justifica la represión ilegal porque el Ejército sólo tenía el poder militar, “pero no el político ni el judicial”, por lo que “el guerrillero” contaba con habeas corpus y abogados defensores; Vilas, afirmaba la nota, supo imponerse por sobre “el papeleo burocrático”.

¹⁹ Comisión Bicameral Investigadora de las violaciones de los derechos humanos en la provincia de Tucumán. *Informe*, Idepala, 1991; Expediente 45709 de la Cámara Federal de Tucumán, por el secuestro y asesinato de Guillermo Vargas Aignasse. El teniente coronel

Como triste saldo de la criminalidad imperante a partir de la invasión militar de Tucumán, la Bicameral registró 638 casos de secuestrados-desaparecidos denunciados entre 1975 y 1979. Esa cifra se amplía ligeramente en una lista de los organismos de DDHH, con nuevas denuncias en sede judicial, hasta un total (siempre provisorio) de 656 desaparecidos: 239 hasta el golpe del 24 de marzo y 410 después, más un pequeño número sin fecha determinada. Los 239 representan el 36.6% del total de desaparecidos en Tucumán a lo largo de los años '70: 9 en 1974, 145 en 1975, 85 entre enero y marzo de 1976.²⁰

El 92 por ciento de las víctimas fueron secuestrados de sus domicilios o lugares de trabajo: periodistas, sindicalistas, activistas estudiantiles, militantes de izquierda, obreros de los ingenios, peladores, pequeños almaceneros, abogados. Entre los desaparecidos figuran varios niños, ancianos, mujeres embarazadas, y la aniquilación de familias enteras, como los Rondoletto, López, Morales, Décima, Alarcón. Cuando mataron a Gerardo Pisarello, en julio de 1976, terminaron con el último abogado que se animaba a presentar pedidos de hábeas corpus. La UNT registra el triste récord de ser el centro universitario con mayor número de desaparecidos de todo el país; 39 docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras integran ese luctuoso listado. El 70 por ciento de los secuestros se efectuaron en la capital; pero las ciudades y villas del interior como Monteros, Famaillá, Santa Lucía y demás pueblos de ingenios fueron también assoladas por la criminalidad del terrorismo de estado.

Si este último se define como el plan sistemático de detenciones ilegales y asesinatos de personas, la aplicación de torturas y tratos crueles y degradantes, la internación de los detenidos en CCD, la supresión del derecho a la defensa y al debido proceso y el control absoluto de la información acerca de sus prácticas, entonces el OI fue sin duda su primera aplicación oficial en la historia argentina. Poder absoluto e incontestable, suspensión de toda garantía y derecho individual, secuestros y asesinatos directos, cadáveres en las calles, bombas nocturnas, allanamientos masivos, CCD, tortura aniquiladora, todo funcionó bajo el gobierno pretendidamente constitucional antes del 24 de marzo.²¹

La Triple A y el Operativo Independencia

El comportamiento criminal del estado argentino se había iniciado como una "guerra de depuración" interna del partido gobernante, ejecutada por la Triple A, organizada por López Rega con agentes y ex agentes de la federal, los matones sindicales, algunos oficiales de las fuerzas armadas, chacales a sueldo, mercenarios de la OAS, fascistas españoles, agentes de la CIA. Reunía

Mittelbach, que se desempeñó como jefe de la Fuerza de tareas Berdina en Famaillá, entre mayo y julio de 1976, testimonia su horror al llegar y constatar que actuaban como en Argelia, porque los prisioneros eran torturados y luego se "disponía" de ellos, es decir que eran ejecutados. En Federico Mittelbach. *Informe sobre desaparecidos*. Buenos Aires, La Urraca, 1987.

²⁰ Bicameral de Tucumán, 1991; cifra ampliada en www.desaparecidos.org/arg/tucuman/lista.html; CONADEP. *Nunca Más*. Buenos Aires, Eudeba, 1984, registró 565 casos de desaparecidos en Tucumán.

²¹ Definiciones del terrorismo de estado en Conadep, cit.; Vezzetti y en Baltazar Garzón. "Sumario 19/97. Genocidio, Terrorismo y otros". Juzgado Central de Instrucción nº 5, Audiencia Nacional de Madrid, 1997.

la escoria de tres generaciones de policías dados de baja, traficantes, delincuentes comunes y extremistas de derecha, cuya primera gran operación fue la masacre de Ezeiza, el inicio del baño de sangre “depurador” de ese movimiento. Tras la muerte de Perón el 1 de julio de 1974, proclamó “la hora de los fierros” y, entre julio y septiembre de 1974, produjo 220 atentados, 60 asesinatos y 44 víctimas graves, más 20 secuestros y desapariciones. La triple A produjo más de 2000 muertos en 30 meses, en esa “batalla final” de la guerra santa predicada durante décadas por la reacción católica integrista.²²

Los artículos 5 y 6 del decreto secreto de Isabel de febrero de 1975 determinaban la participación del Ministerio de Bienestar Social en el Operativo Independencia, para desarrollar la “acción cívica y psicológica” en coordinación con el Estado Mayor del Ejército; la tarea quedó a cargo del secretario de Prensa de la Presidencia, Jorge Conti, uno de los jefes de las Tres A. Ya en los rastillajes de mayo de 1974 el comisario Alberto Villar, uno de los jefes de este escuadrón de la muerte, empleó sus métodos contra la población civil de Monteros y Acherá. El 20 de febrero de 1975 Anaya se reunió con una treintena de “funcionarios” del Ministerio de Bienestar Social, integrantes de ese operativo “sanitario” que encubría sus acciones represivas: desarrollaron una tarea de espionaje y terror en la zona de Santa Lucía, presentada como un “relevamiento”, al mando de Luis Ángel Palma, cuyo enlace local era el SEPAC tucumano, doctor Adolfo Rospide.²³

Las filiales tucumanas del lopezreguismo fueron el denominado Comando Nacionalista del Norte, nombre ocasional de la Alianza Libertadora Nacionalista, que organizó el lanzamiento de la Juventud Sindical Peronista, pantalla de López Rega y de la Triple A. Anunciaron la “guerra sin cuartel contra los enemigos de la Nación Argentina”, contra “los cipayos de la sinarquía internacional”, y “la limpieza de marxistas de la administración pública y del movimiento”, así como en las comunas del interior.²⁴ En enero lanzaron una ofensiva de depuración contra “la invasión marxista en la Municipalidad”, cuyo intendente era el peronista Carlos María Torres. El 2 de marzo de 1975 declaraba no dudar de que “nuestro glorioso Ejército sabrá ahogar en sangre a los “invasores y los traidores”.²⁵

Otros organismos que colaboraban con la represión ilegal, como el comando regional de la ARA (Acción Revolucionaria Antimarxista), amenazan públicamente a los dirigentes políticos locales por sus denuncias contra Arrechea, “que está limpiando la ciudad de los sumergidos en el mundo de la droga y de la delincuencia”, porque la policía de Tucumán “es una de las mejores del país y se encuentra en una etapa de exterminio radical de la corrupción y la delincuencia subversiva”. Rodolfo Vargas Aignasse, hermano del diputado secuestrado por Bussi el 24 de marzo de 1976, denunciará que el entonces rector de la UNSTA, Aníbal Fosbery, colaboró con la actividad criminal de Vilas y Bussi por medio de la agrupación católica fundamentalista

²² Sobre la Triple A ver Ignacio González Janzen. *La Triple-A*. Buenos Aires, Contrapunto, 1986; Rodolfo Terragno. *El peronismo de los 70*. Buenos Aires, Capital intelectual, 2005, 2 vols.; y Marcelo Larraquy. *López Rega. La biografía*. Buenos Aires, Sudamericana, 2004.

²³ *La Gaceta*, 22 de febrero de 1975; Andersen, 1993.

²⁴ En *La Gaceta*, 13 de abril de 1974, y *Depuración*, 10 de agosto de 1974, pasquín dirigido por Ismael Haouache y Roberto Lascano.

²⁵ *La Gaceta*, 9 de enero y 2 de marzo de 1975.

denominada Fasta, que proporcionaba preparación militar a sus miembros y participaba en las reuniones del Comando de la V Brigada, donde se elaboraban las listas de personas a secuestrar: una "Comunidad de Servicios de Inteligencia" integrada por los organismos del Ejército, la SIDE, el SIC de la Policía provincial, la sección de inteligencia de la Policía federal, y una serie de civiles seleccionados. La CONADEP sindicó al arzobispo Blas Victorio Conrero como uno de sus participantes.²⁶

Amado Juri y el terrorismo de estado

El OI militarizó Tucumán y lanzó una represión indiscriminada, con la provincia invadida desde el 9 de febrero por miles de soldados del Ejército, la Gendarmería, agentes de la Federal y centenares de agentes de los múltiples servicios de inteligencia. Sostenido por sus conexiones con López Rega e Isabel, Vilas actuaba como el jefe político, no sólo militar, de la provincia, por encima del gobierno civil de Juri, pero éste le prestó su decidido apoyo, confiriendo un manto de legalidad a sus acciones criminales.

López Rega e Isabel habían dudado durante largos meses entre la "depuración" de Juri y su mantenimiento. El 28 de abril de 1975 Isabel viajó a Tucumán en uniforme de "fajina", para dar su respaldo público al Ejército. Lo hizo sin comunicarlo a Juri, ni recibir siquiera a sus ministros en el aeropuerto Benjamín Matienzo. Luego Juri fue convocado por radiograma a Buenos Aires, donde hizo una pública profesión de subordinación. Humillado de esta manera, Juri ignoró los atropellos y salvajadas que se estaban cometiendo en Tucumán, y elogió el accionar de los militares, policías y servicios que a lo largo de ese año 1975 dejaron un reguero de sangre en la provincia.

El 24 de febrero de 1975, los líderes de la CGT regional, la FOTIA y las 62 visitaron a Vilas en su comandancia en Famaillá para expresarle el "apoyo de la clase trabajadora al Ejército en la tarea que está realizando", y le ofrecieron su colaboración. Luego desfilará por allí el interventor del PJ, coronel retirado Adolfo Phillipeaux, francés por su linaje y por sus ideas fascistas, para visitar al general a quien lo unía, según declaró, "una vieja amistad", por lo que se sentía "orgullosa de que el general Vilas comande las tropas de Tucumán".

El 16 de julio de 1975 Juri puso en funciones a Antonio Arrechea, quien sucedió al coronel Castelli en la jefatura de la policía de Tucumán, exhortándolo a "terminar con los apátridas", esos "hombres sin sentimientos que pretenden cambiar nuestra gloriosa enseña azul y blanca". Arrechea se erigió pronto como el subcomandante de Vilas, amonestando públicamente a los funcionarios del gobierno, exigiendo su destitución y aún deteniendo a algunos. Competía con Vilas en cuanto a insania mental e ideológica y en su fanatismo "depurador", y se destacaba por el ensañamiento con que trataba a los detenidos. Dirigía el Servicio de Información Confidencial, con el comisario Roberto Heriberto Albornoz como su subordinado inmediato, responsable de la mayoría de los secuestros y asesinatos cometidos en Tucumán en esos años. Los atentados, los allanamientos masivos, los secuestros y los asesinatos se multiplicaron con su llegada; durante el mando de Castelli en la Policía algunos detenidos eran colocados a disposición del PEN. Arrechea se ocupó también de la "moralización" de los tucumanos: el 18 de enero de 1976 allanó todos los

²⁶ *La Gaceta*, 13 de diciembre de 1975; Conadep y Expdte. 47509, cit.

hoteles alojamiento de la ciudad y sus alrededores, transportó a centenares de parejas en carros de asalto a la Jefatura y depositó sus vehículos en torno a la Plaza Urquiza, convocando a padres, esposas y maridos a recogerlos.

Al dejar la Jefatura de la policía de Tucumán poco tiempo después del golpe, Arrechea se despidió de sus subordinados con las siguientes palabras: “Ya tenéis adquirida la ciencia espantable, anticristiana, maldecida mil veces de Dios, pero imprescindible y salvadora, de los pueblos históricos, de las naciones heroicas; aquella ciencia enlutada de matar, pero de matar sistemáticamente, lacónica y sigilosamente, al mercenario traidor, al enemigo de la Patria... Por eso benditos seáis, sí, benditos por toda la vida mis compañeros queridos de lucha (...) Yo os señalo los primeros, yo os declaro los ungidos”. Fue en la escuela de policía General San Martín de la ciudad de Tucumán, el 5 de mayo de 1976. A continuación, Bussi despidió “con orgullo” a su “camarada sin tachas”, le obsequió un fusil de la fuerza y prohibió a los medios locales que publicaran el discurso de despedida del loco asesino. La Unión de Villeros y la Juventud de Villeros Justicialistas declaraban su apoyo incondicional al jefe policial “por su patriotismo, su moral, su sensibilidad humana”. Como señalara Arturo Ponsatti años después, la “criminalidad ostensible y ruidosa” del “alienado” general Vilas, como de Arrechea, sería sustituida por una “expresión morigerada” con Bussi: no convenían ya las explosiones de autos con cadáveres. Más apropiado sería decir: criminalidad “silenciosa” de Bussi.²⁷

En su mensaje anual a la Legislatura del 1 de abril de 1975, Juri declaraba ufana y macabramente que la Policía de Tucumán había actuado en el curso de 1974 y 1975 “cuidando especialmente la garantía de los derechos de protección a la vida, integridad física y patrimonial, etc.” (y el etcétera indica que el gobernador enumeraba los derechos humanos como se enumeran frutas o verduras) de todos los habitantes de la provincia, añadiendo que el accionar de la policía y “el de nuestro Ejército” “han dado un golpe mortal a las facciones extremistas que habrán de ser desterradas para siempre del territorio patrio”. En el mes de marzo precedente, el jefe de la estación Manuela Pedraza había sido secuestrado y arrojado al Río Seco, junto con otras personas de Simoca. El día 5, un automóvil había volado en Moreno y Crisóstomo: los restos de tres hombres y una mujer quedaron esparcidos a 50 metros y 7 pisos de altura.²⁸

Cuando el Ejército anunció el retiro de Vilas en diciembre de 1975, la Fotia pidió su permanencia en una solicitada donde lo declaraba “soldado ejemplar de la Patria”; lo mismo hicieron la JPRA, la Unión de Villeros Peronistas, el Frente de Agrupaciones Justicialistas y la ALN, con la firma de su jefe Ismael Haouache, bajo el titular de “Dios, Patria, Hogar”. Amado Juri dirá que “Vilas es un hombre que ha llegado al pueblo”. Poco antes, el 3 diciembre,

²⁷ Discurso mecanografiado de Arrechea, 5 de mayo de 1976, en ALG; Ponsatti en revista *Plural*, 1/9, abril 1988. La justicia federal tucumana imputó a Arrechea y Vilas en mayo de 1984, por el secuestro y asesinato de Adán Leiva, Abel Herrera, Hugo Macchi, Fernando Carrascosa, Guillermo Abregú, Graciela Barcala, y de los diputados Damián Márquez y Guillermo Vargas Aignasse. En noviembre de 1987, el Tribunal de Cuentas de Tucumán reclamaría a Arrechea y Jesús Santos, jefes policiales durante el período de Juri, por sustracción de pistolas Colt y escopetas de la repartición, y por la entrega de una Browning 9 mm a Ismael Haouache, “personal civil”. *La Gaceta*, 2/3 de mayo de 1984 y 28 de noviembre de 1987.

²⁸ Provincia de Tucumán. *Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados. 1973-1976; La Gaceta*, 1-6 de marzo de 1975.

La Opinión informaba que se había producido “Otra masacre en Tucumán”: habían ultimado al padre de Clarisa Lea Place y sepultado a su abuela bajo la montaña de ruinas de su casa dinamitada. Fue 24 horas después de la voladura de 7 cadáveres dentro de una rural estanciera, cuyos restos humanos quedaron esparcidos por toda la cuadra. Se adjudicaba el atentado una organización que firmaba “Dios, Patria o Muerte”, en el mismo lugar donde mataran a Viola un año antes. Esa noche, 6 atentados con bombas sacudían la ciudad, mientras la policía y el Ejército realizaban allanamientos y detenciones masivas, comenzando por el barrio de Ciudadela. Héctor Manfredo me informa que en la noche del 2 de diciembre fueron secuestrados 13 docentes y estudiantes de la UTN, incluida su decana, el presidente y otro directivo del centro de estudiantes: 2 de los secuestrados pertenecían al PC. Fueron llevados al Arsenal, que ya operaba como CCD.²⁹

En esos días de diciembre de 1975, las dos cámaras legislativas y el poder ejecutivo provincial entregaron a Vilas medallas distintivas en reconocimiento por su labor. El general declaró en la ocasión que había cumplido con la misión de “aniquilar la subversión” en la provincia. Lo acompañaba el inefable Arrechea, forrado con su enorme bandolera de cartuchos de Itaka. En el senado los recibió Dardo Molina, quien sería secuestrado y desaparecido luego del golpe, junto con las autoridades de la cámara; en Diputados, su presidente y, entre otros, Ricardo Díaz, a quien tendrían detenido durante algunos años. El 21, los dirigentes de Fotia visitaron a Vilas en la guarnición militar para entregarle otro presente de reconocimiento. En esos días, la UCR denunciaba que “la ley, el orden y la seguridad, son entidades extinguidas en la provincia”. El 31 de enero de 1976, la Fotia declaraba su identificación con los objetivos de las Fuerzas Armadas, y que no vacilaría “en apoyar sinceramente las instrucciones del comandante de la V Brigada, para que los procedimientos se realicen”: el destinatario era el nuevo jefe del Operativo y próximo dictador de Tucumán, Antonio Bussi.³⁰

Por qué se descendió hacia la barbarie

La deriva hacia el estado de barbarie y la criminalización del Estado, como señala Vezzetti, tuvo complejos orígenes, resultado de un largo proceso de gestación que se alimentó con la doctrina de la seguridad nacional, con raíces intelectuales de corte fascista originadas en Francia y en el adoctrinamiento por parte del Pentágono a los militares latinoamericanos; a ello se añadió el componente corporativo “desbordado” del Ejército, su naturaleza y espíritu de casta cerrada, que lo alienó de la sociedad. La ideología de la guerra y de la muerte, de la redención por la sangre, que formaba parte de las vertientes nacionalistas de derecha, de los cuadros militares y de la Iglesia integrista, y que estaba presente en el ala derecha del movimiento justicialista y del partido gobernante en esos años, venía prometiendo este “baño de sangre” desde los tempranos escritos de Julio Meinvielle o Leonardo Castellani. Monseñor Bonamín decía el 24 de setiembre de 1975 que “cuando hay derramamiento de sangre hay rendición”, y que el Ejército es “una persona

²⁹ *La Gaceta*, 2-7 de diciembre de 1975; y *Entrevista del autor con Héctor Manfredo*, mayo de 2005.

³⁰ *La Nación*, 31 de enero de 1976.

moral". Lo repetiría el padre Cucala Boix en Tucumán ante las tropas del Operativo, el 6 de enero de 1976: "sin sangre no hay rendición posible".

Pero el terrorismo de estado sistemático y el comportamiento criminal de los agentes del gobierno, que tuvo sus antecedentes en figuras como las del ministro Francisco Imaz durante el régimen de Onganía, o en casos notorios como la masacre de Trelew, sería introducido como práctica rutinaria por las bandas criminales conducidas por López Rega, con el Ejército "cooperando" o simplemente dejando hacer. Derivó directamente de esa lógica de la depuración interna del Estado y del partido peronista, expresión de una guerra civil entre las bandas armadas de extrema izquierda y extrema derecha de ese movimiento, que cubrió con su rastro de sangre a toda la sociedad. El terrorismo de estado se gestó así en las entrañas del gobierno constitucional, como un efecto infernal de esa "noche de los cuchillos largos" criolla que se extendió por más de un año y medio, desde la masacre de Ezeiza hasta la caída de López Rega en julio de 1975, y aún después. El "foco" de guerrilla rural tucumano proporcionaría un magnífico pretexto para que el ejército, el lopezreguismo y los servicios actuaran con la más absoluta impunidad, instaurando oficialmente el terror de estado en la provincia: el poder provincial en todas sus ramas (ejecutiva, legislativa, judicial), el partido de gobierno y la conducción gremial mayoritaria cohonestaron, cuando no colaboraron, con los métodos criminales empleados por los comandantes Vilas y Bussi desde mucho antes del golpe de estado. Tucumán y el Operativo Independencia sirvieron de este modo como el campo de ensayo del "Proceso de Reorganización Nacional".

San Miguel de Tucumán, agosto de 2005